



**UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA  
FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS  
ESPECIALIZACION ALTA GERENCIA**

---

**IMPACTO SOCIOECONOMICO DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA**

**Elaborado por: Emiro Ángel Sánchez Chaparro.**

**Seminario de Grado**

**Presentado a: Dra. María Carolina Ortiz Riaga**

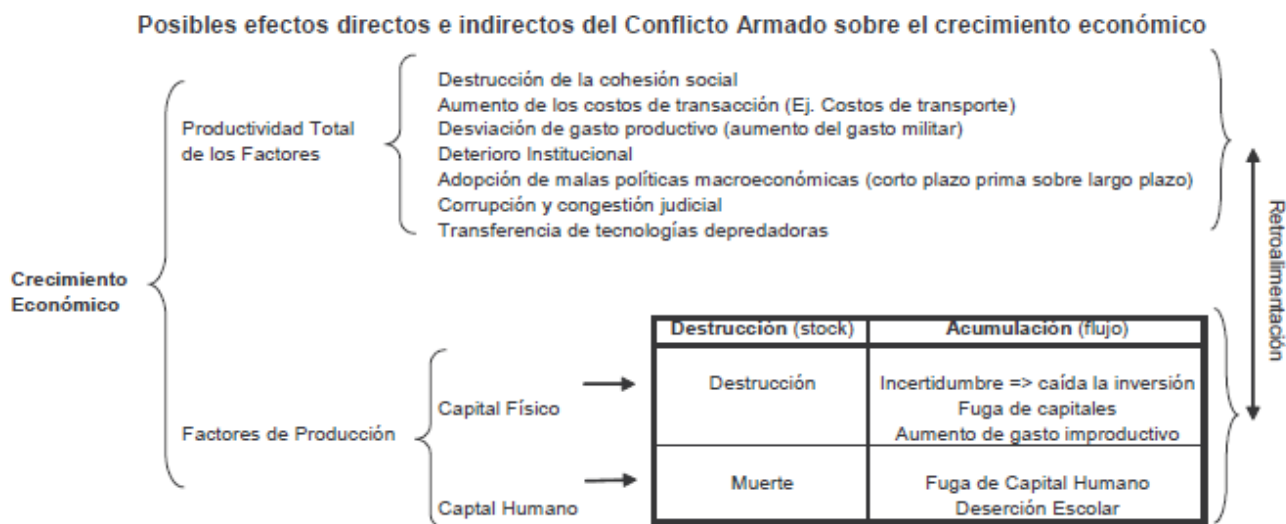
**BOGOTA, D.C. Agosto de 2013**

# IMPACTO SOCIOECONOMICO DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA

## 1. INTRODUCCION

Los fenómenos de violencia y criminalidad han sido estudiados de tiempo atrás desde la perspectiva de diversas disciplinas. Los diagnósticos de la ciencia política, la sociología y, en los últimos años, las aproximaciones más cuantitativas desde la economía son frecuentes. No obstante, la mayoría de los trabajos se concentran en explicar el origen y persistencia del crimen violento; solo una parte reducida distingue la violencia de las manifestaciones propias del conflicto armado interno, y un segmento aun menor trata el tema de sus consecuencias y concretamente, de su impacto sobre el desempeño económico.

Este Trabajo pretende analizar en que medida la profundización del conflicto armado ha afectado la economía del país.



## **2. RELACION CONFLICTO ECONOMIA**

El conflicto armado interno es un choque, que los agentes económicos pueden percibir como temporal o permanente y, que de acuerdo con ello, influye de manera diferente en sus decisiones de consumo, ahorro e inversión y por lo tanto en el crecimiento económico (Echeverry et al., 2001). Restrepo (2001) plantea cómo en los últimos años, las guerras civiles y otras manifestaciones de conflictos internos, han ido acompañadas por el estancamiento material de las sociedades que enfrentan estos problemas.

El impacto del conflicto armado interno sobre el crecimiento económico, se da a través de varios canales. El conflicto no sólo afecta el desempeño económico directamente (es decir, a través de su impacto en la productividad total de los factores), sino también de manera indirecta a través del deterioro en la acumulación de factores de producción, debido a la incertidumbre inherente al conflicto. Además, es de esperar que el conflicto también afecte el entorno y la construcción de arreglos sociales y las instituciones que garantizan el cumplimiento de los contratos, lo que en diferentes contextos se denomina como “capital social”, “infraestructura social” o “normas sociales”; repercutiendo así no solo en el crecimiento económico presente, sino en la capacidad futura de generar riqueza, lo que se traduce en una modificación de las sendas de crecimiento a largo plazo.

A partir de la década de los noventa se ha centrado la atención, en estimar los costos en que ha incurrido la sociedad y la economía, en el transcurso de su prolongado conflicto. Estos estudios tienden a cuantificar aspectos comunes como pérdidas por daños a la infraestructura física, el gasto militar, las transferencias ilegales por cuenta del secuestro y la extorsión, los costos sociales, la contracción de la actividad económica y la pérdida de productividad e inadecuada asignación de recursos. Todo esto hace parte de la dimensión económica del conflicto y el impacto que ha tenido, en términos del incremento de los costos económicos, sobre las posibilidades de desarrollo de varios sectores productivos. Esta cuantificación de los costos del conflicto ha estado ligada a la expansión de los grupos al margen de la ley; que no sólo incrementaron significativamente su poder territorial y político, sino que también su expansión en una mayor capacidad de perturbación del funcionamiento de la economía.

### **3. INFLUENCIA DEL CONFLICTO SOBRE EL CAPITAL FISICO**

El efecto distributivo de la actividad depredadora sobre la acumulación de capital físico, se observa a través de varios mecanismos que se agrupan en tres argumentos principales.

Existe, en primer lugar, un efecto directo en la medida en que se destruya capital en la acción depredadora- como en el caso de los atentados contra la infraestructura pública y privada-ya que como lo anotan Alesina et al (1995) y Barro (1991), el menoscabo de los factores de producción reducen la inversión y la pospone de manera que el capital perdido no es remplazado. Esta situación es evidente en la coyuntura colombiana, donde el conflicto ha entrado en una etapa en la que los actores armados, no sólo depredan para mantener su aparato armado, sino que atentan con intensidad creciente contra los activos físicos del bando contrario, buscando debilitar la estructura financiera y productiva del oponente, así como para magnificar su propio “valor de amenaza” en caso de una eventual negociación (Restrepo, 2001).

En segundo lugar existe el efecto indirecto de esa depredación sobre la contraparte, que reduce el flujo de fondos con el cual ésta puede financiar su propio esfuerzo en la contienda, lo que a su vez, le exige la búsqueda de un mayor financiamiento para tal esfuerzo. En efecto, en el caso del conflicto colombiano, donde una de las partes en disputa es el estado, la destrucción por parte de los grupos subversivos reduce el capital gravable y por lo tanto los impuestos con que se financian acciones defensivas, al tiempo que se desencadena una mayor destinación de recursos hacia actividades como defensa y seguridad, a expensas de inversiones productivas que favorecerían la acumulación de capital; lo cual tiene un efecto negativo sobre la productividad de los factores.

Autores como Knigh, Loayza y Villanueva(1996) y Bordo y Végh(2002), subrayan cómo el aumento del gasto militar implica un costo económico enorme, en la medida en que su financiamiento requiere de mayores impuestos y endeudamiento generando un “crowding out” de la inversión productiva, así como presiones fiscales, que aumentan la incertidumbre hacia el futuro y disminuyen de manera simultánea la rentabilidad esperada de inversión y el flujo de ahorro disponible, para la financiación de acumulación de capital físico.

Por otro lado, ésta reasignación también es válida para individuos y grupos sociales, que transfieren recursos hacia el financiamiento privado de seguridad,

Pues la amenaza de expropiación se vuelve una carga decisiva, en ausencia de un estado capaz de defender la totalidad de su territorio. Así, la influencia del conflicto sobre la acumulación de capital físico, está también ligada a las falencias institucionales, en la medida en que los derechos de propiedad (no sólo sobre activos físicos sino, muchas veces, sobre los derechos fundamentales como la vida y la libertad) que no pueden ser garantizados en situaciones de guerra (Retrepo, 2001).

En tercer lugar, hay efectos adicionales relacionados con muchas externalidades negativas de la depredación. No sólo un estado de confrontación, supone un menor retorno a la inversión y mayores gastos en seguridad, ésta también es causa de un incremento en la congestión del aparato judicial, de transferencia de tecnologías depredadoras, de reducción de la cohesión social, etc. (Gaitán, 1995).

#### **4. IMPACTO DEL CONFLICTO SOBRE EL CAPITAL HUMANO**

La influencia negativa del conflicto armado sobre la acumulación de capital humano sucede a través de varios mecanismos. En primer lugar, el canal más evidente son las muertes y las incapacidades asociadas a la guerra, situación que, además, afecta principalmente a los grupos más jóvenes de la población masculina en edad de trabajar (Ruiz y Rincón, 1991). Cuando la incapacidad o la muerte afectan a la población en edades más tempranas, su impacto a largo plazo sobre la economía es mucho mayor.

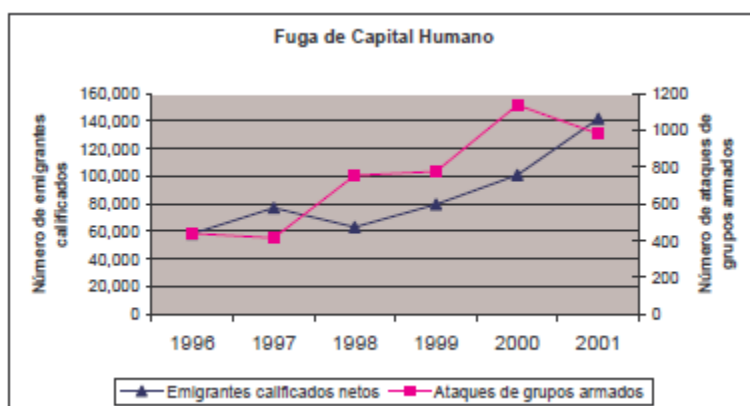
Adicionalmente, el recrudecimiento del conflicto en zonas rurales, genera situaciones de desplazamiento forzado y de deserción escolar, que en la mayoría de los casos, implica una reducción en la calidad de vida de las familias desplazadas, reflejada en el deterioro de indicadores de educación, salud y empleo. En el conflicto interno actual han sido desplazadas unas 3.500.000 personas y 700.000 familias expulsadas de alrededor de 6 millones de hectáreas.

Por otro lado, el mantenimiento de ejércitos combatientes implica el entrenamiento de individuos para la guerra, de manera que existe una fracción del capital humano de la sociedad, que no invierte en actividades productivas y cuya reinserción a ésta, en caso de una terminación política del conflicto supone costos enormes (Murphy et al, 1993).

En relación con esto debe rescatarse nuevamente el argumento de la recomposición del gasto público a favor de un mayor gasto militar (Knigth et al, 1996) y en detrimento de la importancia del gasto social, de acuerdo con las prioridades fiscales establecidas por las características de la guerra. En Colombia, el reciente impuesto extraordinario equivalente al 12% del patrimonio líquido de los contribuyentes, destinado al fortalecimiento de las fuerzas armadas responde a esta tendencia. Independientemente de su racionalidad de extender el esfuerzo estatal en materia de seguridad, necesariamente estos recursos se sustraen de otras actividades productivas.

Existe finalmente un elemento adicional, en línea con el argumento de riesgo mencionado antes, como causa fundamental de la falta de incentivos para la inversión de capital físico.

En este caso, un conjunto de variables heterogéneas que van desde el rechazo que produce el conflicto en el imaginario colectivo, el miedo, el desafecto y la percepción de que no vale la pena vivir en un territorio en guerra hasta el riesgo de ser secuestrado, la falta de oportunidades y la posibilidad de una mejor remuneración, produce la salida de mano de obra capacitada hacia otros países. Este fenómeno ha cobrado en Colombia importancia creciente en años recientes (Ayala, Bermúdez, Masón y Murcia, 2001)<sup>2</sup> lo que tiene consecuencias negativas en crecimiento a largo plazo por cuenta de la pérdida de conocimiento y capacidad productiva, pues se trata de ciudadanos en los que el país ha invertido, pero seguramente no obtendrá los retornos de esa inversión.



<sup>2</sup> Fuente: OIM, DAS y OIT.

## **5. IMPACTO DEL CONFLICTO SOBRE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

El conflicto interno está estrechamente relacionado con la existencia de una falla institucional que lo valida. En efecto, la presencia de un alto grado de polarización en la distribución de una o varias características de la población, sumado a la inexistencia de un mecanismo institucional que resuelva la disputa que esta polarización supone, da origen a un conflicto violento.

Por otra parte, la amenaza sobre los derechos de propiedad y el deterioro de las instituciones para su protección, posibilitan las actividades de depredación por parte de los grupos armados en conflicto y debilitan el imperio de la ley. Así mismo, destruyen de manera paulatina el tejido social, especialmente a nivel de comunidades y familias, y conducen a una mayor polarización social y política de los grupos al interior de la sociedad.

Esta combinación de debilidad institucional e incapacidad estatal con bajos niveles de confianza y cooperación, afecta negativamente el desempeño del sector productivo, el intercambio y la formación de riqueza, e incentiva la desviación de recursos hacia actividades improductivas: bien sea de protección y defensa, o actividades ilegales con alta rentabilidad. En efecto, independientemente de su origen, no es extraño que el conflicto interno este acompañado de empresas criminales que facilitan su subsistencia financiera (Restrepo, 2001).

Arbeláez et al. (2001) sugiere además, que el conflicto interno se refleja en el desempeño económico a través de malas políticas económicas, a las cuales el conflicto conduce en la medida en que impone sobre los tomadores de decisiones de política, restricciones y prioridades que de otra manera no estarían presentes.

En términos de los determinantes “próximos” del crecimiento económico, todos estos elementos se pueden ver reflejados en una caída permanente de la productividad total de los factores, que de acuerdo con la descomposición de las fuentes de crecimiento realizada por Cárdenas(2002), es de gran impacto. Habla de hecho de una “implosión” de la productividad a partir de 1980.

## 6. ANALISIS

### a. Efectos Económicos

Así en contraste con décadas anteriores, cuando los efectos del conflicto se percibían como lejanos y poco perturbadores, a partir de mediados de los noventa, de manera consistente, la inseguridad se constituye en uno de los principales problemas que enfrenta la economía colombiana. En el 2006 los gastos en seguridad, incluyendo los llamados sueldos de retiro de las fuerzas armadas, alcanzaban un abrumador 6.3% del PIB (Isaza, Campos, 2007), con un pie de fuerza de más de 500000 hombres. Este gasto compromete una cuarta parte del presupuesto nacional y supera ampliamente los fondos destinados a surtir los gastos sociales a los que está obligado el estado colombiano.

Estas erogaciones en conjunto con el servicio de la deuda, absorben el 50 % del presupuesto nacional y en el futuro será aún mayor. “En estos dos rubros está el problema fiscal, no en los gastos de personal diferentes al militar como viene argumentándose desde hace varios años.....en la solución a los problemas de la deuda y del conflicto interno se encuentran las respuestas a los problemas de las finanzas públicas y del insuficiente crecimiento económico más que en acabar entidades, privatizar empresas, expulsar funcionarios y hacer ineficiente el aparato estatal”, afirma Otero, 2008. De hecho el 81.2 % del total de empleos públicos, con cargo al presupuesto del gobierno central corresponden a defensa, seguridad y policía, y 58.4% de los sueldos y salarios del presupuesto central al ministerio de defensa, según autorizadas fuentes citadas por José Fernando Isaza y Diógenes Campos.

A los gastos que hace el estado colombiano en seguridad, hay que agregarle los que financian privadamente y tienen que ver con asesorías y control de riesgos para los ejecutivos de las empresas que operan en el país, blindaje de sus vehículos, escoltas y guardias que vigilan las propiedades que pueden ser afectadas por la criminalidad en general.

Aunque el crimen como tal, no tiene origen en la operación de la insurgencia o el narcotráfico, lo cierto es que ambos producen una atmósfera de impunidad y de amedrentamiento que favorece la criminalidad común, ya sea la piratería terrestre, el secuestro extorsivo, los robos a empresas y viviendas, etc. Para



contrarrestar la criminalidad desatada, el sector privado gasta adicionalmente en su protección ingentes sumas de dinero. “según datos del sector de seguridad y vigilancia privada.... Este representa aproximadamente 2 puntos del PIB” (Álvarez, Rotteberg, 2008). De esta manera, estamos hablando de que la sociedad colombiana esta gastando más del 8% de la riqueza que produce (PIB) anualmente en combatir la insurgencia, el crimen organizado y la criminalidad común. Dramático resultado para una nación en desarrollo.

Por comparación, el promedio latinoamericano gasta sólo 1.6% del PIB en seguridad provista por el Estado. Colombia es así uno de los países más militarizados del mundo, sólo superado por unos pocos países en guerra como Israel. El caso de Israel sirve bien para contrastar un gasto militar que desarrolla una industria bélica compleja y que exporta armamento, con la de Colombia que importa la mayor parte de su equipamiento de los Estados Unidos, bajo condiciones de financiamiento y contratación benévolas para la industria bélica de ese país.

El informe de Isaza y Campos (2007) reveló algo que las cifras oficiales encubrían, y es que las pensiones de las fuerzas militares se caracterizan por ser muy tempranas y por lo tanto tienden a ser muy costosas. Ese gasto militar era igual al gasto de sanidad, educación y saneamiento ambiental sumados. Revelaba además que de 566.000 funcionarios del gobierno central, 460.000 laboran en el Ministerio de Defensa, es decir el 81.2% de los gastos de personal se dedican a la seguridad.

Había 4.9 soldados por cada combatiente irregular, de tal modo que si alguno se desmovilizaba o era abatido costaba \$450.000.000 millones de pesos, US\$250.000 dólares.

Por otro lado, las FARC cuentan además con mas de la mitad de los recursos del narcotráfico que pueden sumar alrededor de 1.5% del PIB o sea que dispone de cerca de 0.7% del PIB, cerca de 3.6 billones, unos 1700 millones de dólares para financiar las operaciones de cerca de 10.000 hombres en armas.

Lo anterior significa, entonces, que el acelerado crecimiento del gasto en seguridad es insostenible, porque se ha financiado con recursos transitorios como el impuesto al patrimonio y el Plan Colombia y el gobierno no tiene ninguna estrategia definida para sustituir estos recursos. Además, señala la Contraloría, hay dos factores que lo van a incrementar todavía más: el pasivo pensional de las fuerzas armadas, al que hay que dedicar un 47% adicional de

recursos, y las sentencias judiciales en donde hay demandas con pretensiones superiores a los \$15 billones.

La consecuencia económica inmediata del conflicto es un gran atraso de la nación por la falta de la inversión en infraestructura física y social, y una bomba pensional que deberá ser pagada por generaciones.

Los economistas colombianos han tratado de calcular el impacto del conflicto en el crecimiento económico. Mauricio Cárdenas, por ejemplo, en un trabajo del 2007, observa que el crecimiento económico en Colombia se había reducido 2% entre 1980 y 2005, comparado con el obtenido entre 1950 y 1980. En este último periodo la productividad por trabajador aumentaba al 1% anual. “Desde 1980, las pérdidas de productividad han reducido el producto por trabajador a una tasa similar (1% por año). El análisis de series de tiempo sugiere que la contracción de productividad fue causada por un aumento en la criminalidad, la cual desvió el capital y la mano de obra hacia actividades improductivas”. (Cardenas, 2007).

El conflicto interno en Colombia había sido velado porque se encontraba en la frontera agrícola, algo que cambió la incursión de la guerrilla en territorios que generaban mucha riqueza agropecuaria y minera, como Cundinamarca, Antioquia, La Guajira, Bolívar y el Valle del Cauca. En los años noventa el auge guerrillero y de sus secuestros coincidió con una crisis financiera de enormes proporciones que hizo caer el PIB en más del 4% durante 1999, golpe del cual la economía se demoró 4 años en recuperarse.

En esos momentos de depresión económica se magnificó psicológicamente el impacto de la insurgencia y hubo una fuga considerable de capital, junto con la salida del país de muchos empresarios y sus familias.

## **b. Efectos Sociales**

El conflicto armado colombiano ha generado miles de muertos, lisiados, secuestrados, una de las peores crisis de desplazamiento forzado en el mundo, lo que ha conllevado a que Colombia sea clasificada como uno de los países más violentos del planeta y uno de los principales exportadores de drogas ilegales.

La década de 1970 a 1980 se caracterizó por una desmedida represión por parte del Estado (Ejército, policía y autoridades civiles) contra los movimientos políticos, obreros, campesinos y estudiantiles. Además, algunos particulares tomaron con su propia mano la aplicación de medidas represivas contra los mencionados sectores.

### **✓ Muertes**

Según la ONG Amnistía Internacional, entre 2006 y 2008, los casos de las personas y comunidades que han sido golpeadas con mayor dureza por el conflicto, son miembros de comunidades indígenas, afro descendientes y campesinos que han sido víctimas de homicidio o de desplazamiento forzado. En 2007 hubo alrededor de 1.400 homicidios de civiles, superior a los 1.300 que se dieron en 2006. En los casos en los que se logró identificar a los autores, las fuerzas estatales fueron responsables de al menos 330, los grupos paramilitares de unos 300 y los grupos guerrilleros de alrededor de 260.

### **✓ Lisiados y discapacitados**

Se calcula que en Colombia hay sembradas unas 100 mil minas antipersonal, donde las principales víctimas son los civiles que han contribuido a aumentar las cifras de muertes o lisiados.

### **✓ Reclutamiento forzado**

De acuerdo a reportes del Comité para los Refugiados de Naciones Unidas, en el 2008 se presentaron hechos de reclutamiento forzado de menores de edad

por partes de las fuerzas del estado para recopilar información de inteligencia de los grupos armados ilegales. Según el mismo organismo, las guerrillas de las FARC y el ELN, además de grupos paramilitares no desmovilizados, practicaron el reclutamiento forzado de niños, el cual han extendido a regiones fronterizas con Venezuela y Ecuador.

### ✓ **Desplazamiento forzado**

Colombia es el país con mayor cantidad de desplazados en el mundo. Cerca de 4,9 y 5,9 millones de personas han sido desplazadas a causa del conflicto armado, según la más reciente cifra publicada en 2012 por el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno. El informe no incluye a personas desplazadas por el narcotráfico o las bandas criminales. Colombia es uno de los países del mundo con el mayor número de desplazados internos. Hasta mayo de 2011 el Gobierno de Colombia ha registrado a más de 3,7 millones de desplazados internos en el país. ONG como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) consideran que la cifra real de desplazados por el conflicto armado interno desde mediados de los años 80 supera los 5 millones de personas.

El desplazamiento en el país es una causa directa del conflicto armado. Con casi 400.000 refugiados y entre 4,9 y 5,9 millones de desplazados internos en 2012, el país es protagonista del mayor drama humanitario del América latina, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

### ✓ **Narcotráfico y grupos armados**

Es una opinión compartida que el negocio de las drogas ilegales financia de forma importante a las FARC y las Autodefensas y en menor medida al ELN, situación que ha permitido el mantenimiento de sus fuerzas y por lo mismo, agravado las condiciones del conflicto. No obstante, en lo que existen serias divergencias, es en la proporción reconocida a la economía del narcotráfico en cada caso. Así, es posible encontrar informes que parecen exagerar las cifras de financiamiento proveniente de las drogas, dramatizando hasta tal punto el papel jugado por este, que logran desplazar la dimensión originalmente política del conflicto por una reducida percepción narcotizada. De esta suerte, se ha desconocido la complejidad de una lucha desarrollada por más de cuatro

décadas en aras del nuevo postulado de la amenaza narcoterrorista, cuyos efectos políticos ya conocemos.

A continuación daremos una breve mirada a los nexos entre grupos armados y narcotráfico, los cuales, como se verá, responden a un sistema de alianzas coyunturales que han transformado su relación de una conexión marginal con las organizaciones narcotraficantes al dominio actual de varias etapas de la producción.

## **Las Farc**

Los nexos de las FARC con el narcotráfico se remontan<sup>3</sup> a los finales de la década del setenta. Pese a su oposición inicial frente a la economía de las drogas ilícitas, las FARC se vieron llevadas a admitir paulatinamente su funcionamiento en los territorios bajo su dominio a fin de evitar la erosión de sus relaciones con la población de aquellas regiones que veía en los cultivos ilícitos, auspiciados entonces por el cartel de Medellín, su único medio de sustento. En este periodo, la guerrilla no asumió un control directo sobre los cultivos sino que autorizó el cobro de un impuesto por parte de autodefensas.

Tras la VII Conferencia de las FARC en 1982, y vistos los excesos cometidos por las autodefensas delegadas, se regularizó el cobro de impuestos directamente por la guerrilla, a partir de acuerdos formales con las organizaciones de narcotraficantes. Los vínculos con estas se interrumpieron hacia mediados de los ochenta por la confrontación con Gonzalo Rodríguez Gacha en el sur de Colombia, situación que dio pie a la conformación de grupos paramilitares agenciados por los narcotraficantes en el Putumayo y el Magdalena Medio. Este proceso conllevó a una asunción paulatina de los eslabones de la cadena productiva por parte de las FARC en las selvas colombianas. Se pasó así del cobro del impuesto a cada kilo de pasta o base de coca comprado por cada narcotraficante grande o pequeño a los cultivadores, al gravamen de los mismos cultivadores, raspa chinos y recolectores. Adicionalmente, se inició el cobro de impuestos por uso de pistas aéreas para el transporte de precursores químicos y cocaína. Para 1998, las FARC ya han asumido el control total del tráfico local en Putumayo y Caquetá, imponiendo precios fijos para la base de coca y obligando a los campesinos a

---

<sup>3</sup> URIBE, Sergio. “Los Cultivos Ilícitos en Colombia”. Bogotá PNUD y Planeta. 1997.

vender únicamente al frente local. En adición, inician el almacenamiento y venta de grandes volúmenes de coca a los representantes seleccionados de numerosos micro carteles que reemplazaron a los grandes tras la muerte de Pablo Escobar.

Para finales de la década del 90 se hace evidente la expansión territorial de las FARC y su control de una parte importante de las regiones cocaleras, hecho que supuso para las autoridades colombianas, el inicio de las actividades de refinamiento y tráfico de cocaína. Sobre este hecho sin embargo no existe completa certeza. Así, mientras para unas fuentes, el refinamiento y el tráfico internacional del producto acabado son evidentes, para otros analistas, las FARC apenas se encuentran en los niveles de producción y venta de base de coca.

Según un Informe de la Junta de Inteligencia Conjunta (JIC) de Febrero de 2005, el tráfico ilícito de sustancias psicoactivas por parte de las FARC cubre las actividades de producción, cultivo y comercialización de hoja de coca y de amapola, producción de pasta y clorhidrato de coca en laboratorios; cristalizadores y cobro de gramaje sobre la negociación de base de coca, así como el alquiler de pistas de aterrizaje y comercialización de los productos derivados de las plantas anteriores. El conjunto de estas actividades representa el 45,8% del total de ingresos de las FARC y ocupa el primer lugar, seguido de los ingresos percibidos por extorsiones y secuestros.

Lo dicho en el informe de la JID, contrasta con lo sostenido por el *Internacional Crisis Group* en su informe sobre América Latina del año 2005. Según este, “la evidencia sobre la participación de las FARC en el refinamiento y tráfico de coca es menos clara”. Esto porque, además de la dificultad en la veracidad de las fuentes disponibles, “las cuales pueden estar contaminadas por razones políticas o militares, no es seguro que las FARC tengan la capacidad de traficar a escala internacional solas, o incluso que manejen algunas de las etapas posteriores del negocio, como operar laboratorios de refinamiento de cocaína propios, poseer plantaciones de coca, controlar rutas de envío y mantener sus conexiones internacionales para situar la droga en otros países”.

En una línea intermedia se encuentra la investigación de Sergio Uribe, “*Los cultivos ilícitos en Colombia*” 1997, la cual da luces sobre la realización de procesos de refinamiento en las áreas cercanas a los campos de cultivo de la guerrilla.

Sin embargo, el mismo autor reconoce no encontrar evidencia de que las organizaciones guerrilleras hayan desarrollado sus propias redes de distribución en el extranjero, ni de que hayan exportado directamente, aunque sí se beneficiaban sustancialmente de la industria ilegal.

No obstante la imposibilidad de establecer de forma definitiva el eslabón último de participación de las FARC en la cadena de producción y tráfico de drogas, resulta claro el vínculo sostenido por estas con el narcotráfico y el producto derivado de este que nutre sus finanzas. Sea como la mera venta de pasta de coca a micro carteles o como posible inicio de una red internacional del tráfico de drogas, el nexo es inminente.

## **El ELN**

El ELN tiene una participación más<sup>4</sup> bien marginal en el negocio de la droga. Su actividad en zonas cocaleras es menor que la de las FARC o las AUC, pero mantiene presencia en regiones con cultivos de amapola y coca. Según informa el Ministerio de Defensa, en el año 2000 sólo 7 frentes del ELN estaban firmemente establecidos en zonas de cultivo de drogas ilícitas. En el 2005, el ELN operaba en cerca de diez regiones con cultivos ilícitos: La Sierra Nevada de Santa Marta, el Catatumbo, el sur de Bolívar, el occidente del Cauca, Huila, Tolima y el centro de Nariño. Todas estas con presencia paramilitar y/o de las FARC.

No obstante su presencia en zonas cocaleras, la relación del ELN con el narcotráfico es más compleja. Aun cuando mantiene una condena oficial hacia cualquier vínculo entre la causa revolucionaria y el narcotráfico, en algunos casos, como el de la columna móvil Cienfuegos en el Cauca, el ELN ha permitido el ingreso selectivo de algunos narcotraficantes para la compra de látex. Por otro lado, a partir de 2003, y tras su expulsión de las zonas del sur de Bolívar por parte de los paramilitares, varios frentes del ELN han cobrado impuestos a los cultivadores de coca. De esta forma, el narcotráfico ha entrado a hacer parte de sus métodos de financiación.

---

<sup>4</sup> URIBE, Sergio. "Los Cultivos Ilícitos en Colombia". Bogotá PNUD y Planeta. 1997.

## **Las Autodefensas**

Las relaciones entre Autodefensas y narcotráfico surten un proceso inverso al producido con los guerrillas. Vimos cómo las guerrillas llegaron paulatinamente al negocio del narcotráfico, llegando incluso a contradecir sus premisas ideológicas originales. Las autodefensas en cambio, tienen desde sus inicios un lazo indisociable con las organizaciones de narcotraficantes en la década del 80 y comienzos de los noventa y solo hasta ahora, tras convertirse en una federación nacional de bloques armados y con motivo del actual proceso de desmovilización, buscan adquirir un estatus político.

En efecto, los paramilitares deben su origen a los carteles de la droga y su expansión al combate contra la guerrilla por el dominio de las regiones cocaleras. Desde 1996, este proceso se ha intensificado, incrementando los niveles de violencia y desplazamiento en las zonas de enfrentamiento. Para el año 2000, según informes del Ministerio de defensa, siete bloques de las AUC operaban en regiones de cultivos de coca y amapola. Naciones Unidas por su parte, calcula que la presencia paramilitar llega a 86 de los 162 municipios donde se cultiva coca, ubicando frentes en el Magdalena medio, la región sur de Bolívar, el valle del Cauca, el norte de Antioquia, la región de Urabá, Nariño, el noroccidente del Putumayo, el suroccidente de Caquetá, Meta y Guaviare, regiones estas últimas, en disputa con los grupos guerrilleros.

Pese a lo extraordinario de su expansión, la extensión de las zonas de cultivos de las autodefensas no es tan grande como la de las FARC. Sin embargo, diversos estudios parecen comprobar que la participación de las AUC en el negocio de la droga es mucho más profunda. Esto se evidencia, en la participación de unidades paramilitares en el control de rutas claves para el transporte de cocaína hacia el exterior, precursores químicos y armas. Del mismo modo, los paramilitares aparecen vinculados con laboratorios de refinamiento y con decomisos de cocaína. En un informe de la DEA del año 2001 se afirmó que “la organización de Carlos Castaño (y posiblemente otros grupos paramilitares) estaban directamente involucrados en el procesamiento de cocaína”. Pero sin lugar dudas, mas concluyente en este sentido es la declaración efectuada por Carlos Castaño el 9 de junio de 2002 en la que acusó a dos jefes del bloque central Bolívar, Javier Montañés y Ernesto Báez, así como a otros jefes paramilitares de “involucrarse irresponsablemente en el negocio del narcotráfico” En febrero de 2004, el embajador de Estados Unidos en Colombia, William Word, afirmó que las AUC controlaban el 40% del tráfico ilegal de drogas en Colombia. Lo anterior se compadece con la solicitud en



extradición de los Estados Unidos de cinco altos jefes de las autodefensas (Mancuso, Fidel Castaño, Jorge 40, Ramiro Vanoy y Juan Carlos Sierra) y la introducción de doce paramilitares en la lista Tier II de narcotraficantes extranjeros. Como en el caso de las FARC, el nexos con el narcotráfico es evidente. Según el *Internacional Crisis Group*, las AUC parecen desempeñar un papel más importante en las etapas más lucrativas del refinamiento y la exportación de droga, por lo que percibe mayores ganancias. De allí que se establece una suerte de contradicción, con el hecho de que sus ingresos se presenten en numerosos informes como bastante inferiores a los de las FARC, siendo que esta organización se mueve menos en el tráfico internacional y depende más de los primeros eslabones de la cadena productiva, que, coincidentalmente son los menos lucrativos.

#### ✓ Medio Ambiente



La fumigación de cultivos ilícitos con glifosato ha tenido un impacto ambiental negativo en las selvas colombianas, sumado a la deforestación causada por los grupos ilegales.

El gobierno y el sector industrial de Colombia han abogado e implementado monocultivos de plantas, como el caso de la palma africana para la generación de biocombustibles. Estas decisiones tienen enormes implicaciones ambientales: los monocultivos causan el deterioro acelerado de los suelos, incrementan el uso intensivo de agroquímicos que destruyen los ecosistemas, y/o selvas, y la creación de carreteras sin estudios de sostenibilidad o impacto ecológico. Ejemplo patético son los cultivos de palma africana en regiones

selváticas del Pacífico colombiano, uno de los lugares con mayor biodiversidad en el mundo. El gobierno busca abrir paso al desarrollo capitalista y que además disminuye las selvas que dan ventaja táctica a las guerrillas y demás grupos ilegales.

Los grupos guerrilleros como las FARC y el ELN, adoptaron políticas de destrucción de la infraestructura económica que sirve al gobierno y a los intereses de multinacionales capitalistas. Desde 1984, la destrucción de oleoductos petroleros es la táctica que más han utilizado las guerrillas y han afectado el medio ambiente. Dichos derrames de petróleo han causado la contaminación de suelos, fauna y flora, e importantes cuencas hidrográficas.

Los grupos armados ilegales envueltos en el negocio del narcotráfico como las FARC, ELN y AUC han promovido su expansión, con la generación de demanda, lo que genera mayor destrucción.

### ✓ **Respuesta Popular**

A lo largo del conflicto armado colombiano se han producido protestas populares contra los hechos violentos causados por los diferentes actores del conflicto armado, y en otros en apoyo a alguno de los actores. Los más importantes han sido el Movimiento de la "Séptima papeleta" que en parte se le atribuyó el impulso para la creación de la Constitución de Colombia de 1991, el del Mandato por la Paz de 1997. A principios del siglo XXI se llevaron a cabo Homenaje a las víctimas del paramilitarismo, la parapolítica y los crímenes de Estado, Un millón de voces contra las FARC y el Gran Concierto por la Paz del 20 de julio de 2008.

### ✓ **Imagen internacional de Colombia**

En países que se presentan fenómenos de mafias y narcotraficantes se le empezó a denominar "Colombianización", donde hacen convergencia el narcotráfico, la violencia y la corrupción. El término ha sido utilizado por la prensa de países como España, Guatemala, México, Venezuela, Nicaragua y Ecuador. A Colombia se le ha asociado incluso con Afganistán por la asociación entre mafias terroristas y narcotráfico.

## CONCLUSIONES

Los planteamientos y datos plasmados, muestran que el conflicto armado no sólo impone altos costos a los sectores y a las personas que son golpeados directamente por éste. Por el contrario, la literatura actual muestra que moverse en un entorno impregnado de violencia representa en sí costos sustanciales y reales que la sociedad se ve obligada a asumir. Como lo ha ilustrado este trabajo, en Colombia, al igual que en otros países, la estimación de los costos económicos que subyacen al conflicto se vuelve una tarea ineludible para diversas instituciones estatales y académicas, desde el momento en que se empieza a percibir que éste está imponiendo costos enormes a diversos sectores productivos de la economía y a la sociedad como tal.

Como se describió, los estudios que hasta el momento han estimado los costos del conflicto lo hacen calculando los costos generales en términos porcentuales del PIB. Esto ha permitido evidenciar los efectos negativos del conflicto sobre el crecimiento de la economía colombiana. Por otra parte, la estimación de los costos del conflicto ofrece una aproximación al monto de recursos que se dispersan a causa de éste, y que potencialmente podrían ser invertidos en otros ámbitos, como la educación y la salud.

Igualmente, estas estimaciones buscan sensibilizar a diversos sectores productivos de la economía y a la sociedad en general, sobre la magnitud y los alcances de una eventual reconstrucción y reactivación económica bajo la construcción de la paz.

## BIBLIOGRAFIA

-Álvarez, S. A. Rettberg. "Cuantificando los efectos económicos del conflicto", Colombia Internacional, No 67, Enero-Junio 2008.

-Cárdenas, Mauricio, "Crecimiento económico colombiano: ¿cambio de suerte?" Working Paper Series, 002403, Fedesarrollo, 2007.

-Isaza, José Fernando, Diógenes Campos. "Modelos dinámicos de guerra: el conflicto colombiano". Kalmanovitz, Salomón (editor). 2010 Nueva historia económica de Colombia, Bogotá: Editorial Taurus, Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2007.

-Coronel Manuel José Santos Pico "Historia Militar del Ejército de Colombia", Volumen II Biblioteca Histórica Militar de Colombia, 2007.

-Comando General de las Fuerzas Militares, Policía Nacional. Agosto 2007.

-Informe Anual Ministerio de Defensa. Julio 2006 – Julio 2007.

-Naciones Unidas, Oficina Contra la Droga y el Delito- Colombia, monitoreo de cultivos de coca.

-INTERNACIONAL Crisis Group. "*Guerra y Droga en Colombia.*" Informe sobre América Latina N° 11 del 27 de enero de 2005, p. 11.

-URIBE, Sergio. "Los cultivos ilícitos en Colombia. Evaluación: extensión, técnicas y tecnologías para la producción y rendimientos y magnitud de la industria", en Thoumi, Francisco (comp). "*Drogas Ilícitas en Colombia: su impacto económico, político y social*", Bogotá: Dirección Nacional de Estupeficientes, PNUD y Planeta, 1997.

-CASTAÑO, Carlos. "La verdad de las AUC ante la comunidad internacional y los EEUU", en *Las verdaderas intenciones de los paramilitares*. Corporación Observatorio para la Paz, Bogotá: 2002. pp. 343- 348.

-INTERNACIONAL Crisis Group. "*Guerra y Droga en Colombia*". Etapas del negocio de la droga: i. cultivo, ii. Recolección, iii. Producción de la primera pasta de coca, iv .producción de la base de coca en cocinas, v. almacenamiento y venta de base de coca, vi. Refinamiento para transformación en cocaína, vii. Transporte a puntos de trasbordo, viii. Transporte al exterior a

puntos intermedios (México, Antillas); ix. Destino Final (EU, Europa), x. venta en grandes volúmenes, xi. Venta en pequeñas cantidades, xi. Consumo. Informe sobre América Latina N° 11 del 27 de enero de 2005, pp. 9- 10.

-MINISTERIO de Defensa. *“El narcotráfico, una amenaza para la seguridad nacional”*, Bogotá: noviembre de 2000.

-OFICINA de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC), *“Colombia: Coca Cultivation Survey 2003”*, Viena: junio de 2004.